



**CONTRADICCIÓN DE TESIS 73/2001-PS.
ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL
TERCER Y QUINTO TRIBUNALES
COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA
CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.**

VO. BO.

**PONENTE: MINISTRO JOSÉ DE JESÚS GUDIÑO PELAYO.
SECRETARIA: ANDREA NAVA FERNÁNDEZ DEL CAMPO.**

México, Distrito Federal. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día veinte de marzo de dos mil dos.

ORTE DE
I NACIOM
MENDOS DE
SALA

VISTA la contradicción de tesis número 73/2001-PS, entre las sustentadas por el Tercer y Quinto Tribunales Colegiados, ambos en Materia Civil del Primer Circuito, y

RESULTANDO:

PRIMERO.- Mediante oficio de fecha veintitrés de mayo de dos mil uno, el Presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito denunció la posible contradicción de tesis entre las sustentadas por el órgano que preside y el Quinto Tribunal Colegiado del mismo Circuito.

SEGUNDO.- Con el oficio anterior, el Presidente de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictó el acuerdo de siete de junio de dos mil uno, en el que ordena se dé el trámite correspondiente a la denuncia de contradicción de tesis.

TERCERO.- Mediante oficio del mismo día, siete de junio de dos mil uno, el Secretario de Acuerdos de esta Primera Sala dio vista de lo ordenado por su Presidente a los Magistrados Presidentes del Tercer y Quinto Tribunales Colegiados, ambos en Materia Civil del Primer Circuito.

Asimismo, mediante oficio de fecha veintidós de junio de dos mil uno, se dio vista al Procurador General de la República, quien no expuso su parecer dentro del término concedido.



CUARTO.- Una vez integrado el expediente, por acuerdo de once de septiembre de dos mil uno, fue turnado al Ministro José de Jesús Gudiño Pelayo, para que elaborara el proyecto de resolución correspondiente.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer y resolver sobre la denuncia de contradicción de tesis a que se refiere este expediente, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XII de la Constitución Política de los



Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por tratarse de una denuncia de contradicción de criterios entre dos Tribunales Colegiados especializados en Materia Civil, sobre un tema de esa especialidad; cuya revisión corresponde en exclusiva a esta Sala.

SEGUNDO.- El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al conocer del juicio de amparo número D.C. 9423/2000 consideró, en lo que interesa, lo siguiente:

TE DE
NACION
RIBOS DE
SALA

"CONSIDERANDO:--- SEXTO.- La interpretación de "la cláusula séptima del contrato, exhibida como "base de la acción, no es violatoria de garantías.--- "Esa cláusula séptima del contrato base de la "acción es del tenor literal siguiente: '... **"SÉPTIMA.- GARANTÍAS.-** El acreditado, la obligada "solidaria y el aval, responden preferentemente del "cumplimiento de las obligaciones que contraen o "puedan contraer por virtud de este contrato, y por "la disposición de los créditos otorgados, así como "la (sic) que se deriven de la Ley o de resoluciones "judiciales. Con todos sus bienes presentes y que "en el futuro adquieran, sin necesidad de anteriores "anotaciones o inscripciones en el Registro Público "que corresponda, salvo que se trate de bienes "inmuebles. De conformidad con lo dispuesto por "el segundo párrafo de la fracción II del artículo "43, de la Ley General de Organizaciones y

"Actividades Auxiliares de Crédito.--- Además, el
"acreditado, en garantía del exacto cumplimiento
"de las obligaciones a su cargo, constituye las
"siguientes garantías:--- 1.- Las naturales como
"son: materiales y materias primas, que se
"adquieran o sean adquiridas en un futuro.--- 2.- La
"obligación solidaria de la empresa denominada
"INMOBILIARIA HEZOMO, S.A., representada en
"este acto por su apoderado legal, MANUEL PÉREZ
"JIMÉNEZ.--- 3.- El aval del Sr. OSCAR ALONSO
"MORENO.--- 4.- El bien inmueble descrito en la
"declaración IV de la obligada solidaria, que aquí se
"describe como si se insertara a su letra...'.---
"Conforme al sentido literal de esa cláusula,
"OSCAR ALONSO MORENO otorgó su
"consentimiento en su carácter de avalista y se
"obligó a responder preferentemente del
"cumplimiento de las obligaciones que contrajo o
"pudiera contraer por virtud del contrato y por la
"disposición de los créditos otorgados a la
"acreditada Grupo Albri, S.A. de C.V., así como de
"las que deriven de la Ley o de resoluciones
"judiciales.--- Luego, el pagaré que garantizó el
"cumplimiento de la obligación contraída,
"corroborra que OSCAR ALONSO MORENO, sí tiene
"el carácter de avalista y quedó obligado al
"cumplimiento de las prestaciones reclamadas,
"conforme a lo dispuesto por el numeral 109 de la
"Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.--



CORTE DE
LA NACION
E AGUERO DE
TRA SALA.

"- Luego, como garantía del exacto cumplimiento
"de las obligaciones a su cargo, el acreditado
"otorgó, entre otras garantías el aval de OSCAR
"ALONSO MORENO y asumió ese carácter al
"suscribir el contrato, así como el pagaré
"correlativo que guarda relación con el contrato de
"crédito de habilitación. Asimismo, como el artículo
"78 del Código de Comercio, permite que, en las
"convenciones mercantiles cada uno se obliga en
"la manera y términos que aparezca que quiso
"obligarse, sin que la validez del acto comercial
"dependa de la observancia de formalidades o
"requisitos determinados, basta que haya aceptado
"la calidad de aval en el contrato de habilitación,
"para que deba responder con esa calidad, porque
"si bien el aval es una institución propia de los
"títulos de crédito, en términos del artículo 109 de
"la Ley General de Títulos y Operaciones de
"Crédito, no hay precepto legal que prohíba
"adquirir esa calidad de aval respecto de un
"contrato de habilitación, y por el contrario, en
"materia mercantil el artículo 78 del Código de
"Comercio otorga el reconocimiento a la voluntad
"de las partes como norma suprema en los
"contratos, al establecer que cada uno se obliga en
"los términos que aparezca que quiso obligarse; de
"modo que esa institución del aval en el contrato
"de habilitación implica que el suscriptor con ese
"carácter adquiere el carácter de obligado solidario,

**"en términos de los artículos 1984, 1987, 1988 y
 "1989 del Código Civil para el Distrito Federal de
 "aplicación supletoria al de Comercio, conforme al
 "artículo 2 de este último.--- Por lo tanto, la
 "institución del aval, aunque está prevista para los
 "títulos de crédito, cuando se utiliza con algún otro
 "contrato como el de la especie, debe interpretarse
 "en el contexto del documento y considerarse que
 "en realidad es un obligado solidario, quien prestó
 "su voluntad al suscribir el acto jurídico, no puede
 "en un juicio desconocer su obligación solidaria,
 "porque falta a la buena fe, ni el órgano
 "jurisdiccional puede eximirlo de la obligación por
 "ser una cuestión formal".**

La tesis que se dictó con motivo de la anterior ejecutoria es la siguiente:

**Novena Época
 Instancia: TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL
 DEL PRIMER CIRCUITO.
 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
 Tomo: XIV, Agosto de 2001
 Tesis: I.3o.C.235 C
 Página: 1198**

**"AVAL. NO CONSTITUYE UNA INSTITUCIÓN DE
 "GARANTÍA EXCLUSIVA DE LOS TÍTULOS DE
 "CRÉDITO. Cuando en un contrato de crédito de
 "habilitación un acreditado otorgó, entre otras
 "garantías, el aval de una persona, quien asumió
 "ese carácter al suscribir el contrato, así como el**



"pagaré correlativo que guarda relación con ese
 "contrato, debe tenersele como obligado solidario,
 "porque si bien el aval es una institución propia de
 "los títulos de crédito, en términos del artículo 109
 "de la Ley General de Títulos y Operaciones de
 "Crédito, no hay precepto legal que prohíba
 "adquirir esa calidad de aval respecto de un
 "contrato de habilitación y, por el contrario, en
 "materia mercantil el artículo 78 del Código de
 "Comercio otorga a la voluntad de las partes la
 "norma suprema en los contratos, al establecer que
 "cada uno se obliga en los términos que aparezca
 "que quiso obligarse; de modo que esa institución
 "del aval en el contrato de habilitación implica que
 "el suscriptor con ese carácter adquiere el de
 "obligado solidario, en términos de los artículos
 "1984, 1987, 1988 y 1989 del Código Civil para el
 "Distrito Federal, de aplicación supletoria al de
 "Comercio, conforme al artículo 2o. de este último.
 "Luego, la institución del aval, aunque está prevista
 "para los títulos de crédito, cuando se utiliza en
 "algún otro contrato, debe interpretarse en el
 "contexto del documento y considerarse que en
 "realidad es un obligado solidario, quien prestó su
 "voluntad al suscribir el acto jurídico, y no puede
 "desconocer en un juicio su obligación solidaria,
 "porque falta a la buena fe, ni el órgano
 "jurisdiccional puede eximirlo de la obligación por
 "ser una cuestión formal que no puede motivar la



CORTE DE
 LA NACION
 ACUERDOS DE
 A SALA

**"inexistencia ni nulidad de su obligación
"contraída".**

TERCERO.- El Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al conocer del juicio de amparo número D.C. 2865/95, consideró lo siguiente:

**"CONSIDERANDO:--- QUINTO.-...--- En una parte de
"su primer concepto de violación, el referido
"quejoso alega que la figura del aval o avalista, es
"una forma de obligarse en los títulos de crédito,
"por medio de la cual se garantiza en todo o en
"parte el pago de los mismos, por lo que dicha
"figura es una institución de derecho mercantil,
"aplicable en exclusiva a los títulos de crédito; por
"lo que la sala responsable no está en lo correcto al
"considerar que la figura del avalista se presenta
"en cualquier tipo de relación contractual, civil o
"mercantil, así como en cualquier documento que
"traiga aparejada ejecución.--- Es fundado el motivo
"de inconformidad que se analiza, pues es cierto
"que la figura jurídica del aval es exclusiva de los
"títulos de crédito, ya que de acuerdo a los
"términos de los artículos relacionados 109 y 116
"de la Ley General de Títulos y Operaciones de
"Crédito, mediante el aval se garantiza en todo o en
"parte el pago de los títulos de crédito, quedando
"el avalista como obligado solidario de aquél cuya
"firma ha garantizado. Consecuentemente, la**



EXPR
ESTI
EXCRF
LA



"afirmación de sala responsable, hecha en el
 "sentido de que la figura del aval tiene aplicación a
 "cualquier relación jurídica civil o mercantil, carece
 "de sustento legal alguno.--- El anterior criterio se
 "corroborra, si se toma en cuenta que las
 "obligaciones de carácter civil o mercantil (que no
 "deriven de un título de crédito), admiten ser
 "garantizadas en su pago, por un tercero, a través
 "del contrato de fianza a que se refiere el artículo
 "2794 del Código Civil para el Distrito Federal, o
 "bien a través de la institución jurídica de la
 "solidaridad pasiva a que se refieren los artículos
 "relacionados 1987, 1988 y 1989 del Código Civil en
 "cita, la cual solidaridad no se presume, por lo que
 "debe hacerse constar expresamente."



FORTE DE
 LA NACION
 CUERDOS DE
 A SALA.

La anterior ejecutoria motivó la siguiente tesis:

Novena Época

Instancia: QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL
 DEL PRIMER CIRCUITO.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta


Tomo: II, Agosto de 1995

Tesis: I.5o C.10 C

Página: 475

"AVAL. CONSTITUYE UNA INSTITUCIÓN DE
 "GARANTÍA EXCLUSIVA DE LOS TÍTULOS DE
 "CRÉDITO. El aval es una institución jurídica de
 "garantía exclusiva de los títulos de crédito, ya que
 "de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 109
 "y 116 de la Ley General de Títulos y Operaciones

**"de Crédito, mediante el aval se garantiza en todo o
"en parte el pago de los títulos de crédito,
"quedando el avalista como obligado solidario de
"aquél cuya firma ha garantizado. Corrobora lo
"anterior, el hecho de que las obligaciones de
"carácter civil o mercantil que no deriven de un
"título de crédito, admiten ser garantizadas en su
"pago, por un tercero, a través del contrato de
"fianza a que se refiere el artículo 2794 del Código
"Civil para el Distrito Federal, o bien mediante la
"figura jurídica de la solidaridad pasiva de
"conformidad con los numerales 1987, 1988 y 1989
"del código en cita, la cual no se presume, por lo
"que debe hacerse constar expresamente.
"Consecuentemente, carece de sustento legal la
"afirmación del Tribunal de segundo grado
"consistente en que el aval tiene aplicación a
"cualquier relación jurídica civil o mercantil".**



QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 2865/95. Marcos Zonana Achar. 15 de junio de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Efraín Ochoa Ochoa. Secretario: Eduardo Francisco Núñez Gaytán.

Nota: Sobre el tema tratado existe denuncia de contradicción de tesis 73/2001, pendiente de resolver en la Primera Sala.

CUARTO.- Con la finalidad de determinar si existe la contradicción de tesis denunciada, a continuación se hace un relato de los asuntos que intervienen en la misma:



- A. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito resolvió el amparo directo número D.C. 9423/2000, promovido por Oscar Alonso Moreno por sí, y como representante común de Grupo Albri Sociedad Anónima de Capital Variable e Inmobiliaria Hezomo, Sociedad Anónima, contra la sentencia definitiva dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, mediante la que se resolvió el recurso de apelación interpuesto en contra de diversa ejecutoria en la que se resolvió el juicio ejecutivo mercantil que promovió Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo contra Grupo Albri, Sociedad Anónima de Capital Variable. Se hizo valer como concepto de violación que la sentencia combatida transgredía las garantías constitucionales de los artículos 14 y 16, con relación a lo dispuesto por los artículos 109 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, 78 y 1298 del Código de Comercio, y 1851 del Código Civil para el Distrito Federal, ya que aun y cuando el quejoso había firmado un pagaré como garantía colateral de un crédito de habilitación no se le debía considerar como aval pues esta figura era propia de los títulos de crédito y no de los ejecutivos.

TRIBUNAL
COLEGIADO
EN MATERIA
CIVIL
PRIMER
CIRCUITO
SALA

El Tribunal Colegiado estimó que el concepto de violación hecho valer era infundado, toda vez que:

- El quejoso otorgó su consentimiento en su carácter de avalista y se obligó a responder preferentemente del cumplimiento de las obligaciones que contrajo o pudiera contraer por virtud del contrato. Entonces, como en las obligaciones mercantiles cada uno se obliga en la manera y términos que aparezca que quiso obligarse, basta que se haya aceptado la calidad de aval para que deba responder en esos términos.
- Y si bien el aval es una institución propia de los títulos de crédito en términos del artículo 109 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, no hay precepto legal que prohíba adquirir esa calidad de aval respecto

de un contrato de habilitación, y por el contrario, en materia mercantil el artículo 78 del Código de Comercio otorga el reconocimiento a la voluntad de las partes como norma suprema en los contratos.

- La institución del aval en el contrato de habilitación implica que el suscriptor con ese carácter adquiere el de obligado solidario, en términos de los artículos 1984, 1987, 1988 y 1989 del Código Civil para el Distrito Federal de aplicación supletoria al de Comercio.
- Por lo tanto, el aval, aunque previsto para los títulos de crédito, cuando se utiliza en algún otro contrato como el de la especie, debe interpretarse en el contexto del documento y considerarse que en realidad es un obligado solidario quien prestó su voluntad de suscribir el negocio jurídico, quien no puede desconocer su obligación solidaria.

B. Por su parte, al Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito correspondió conocer del juicio de amparo directo número 2865/95, promovido en contra de la sentencia dictada por la Sexta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal en el toca de apelación relativo al juicio ejecutivo mercantil; demanda de garantías en la que se alegó, entre otras cosas, que el quejoso carecía de la calidad de aval en el contrato base de la acción.

El Tribunal Colegiado de referencia determinó que la responsable no había dado respuesta a los motivos de inconformidad del quejoso, por lo que se debía de otorgar el amparo sobre la base de que la figura del aval es exclusiva de los títulos de crédito previstos en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, porque:



CONTRADICCIÓN DE TESIS 73/2001-PS

- De acuerdo a los artículos 109 y 116 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, mediante el aval se garantiza en todo o en parte el pago de los títulos de crédito, quedando el avalista como obligado solidario de aquél cuya firma ha garantizado.
- Las obligaciones de carácter civil o mercantil admiten ser garantizadas en su pago por un tercero a través de otros medios como la solidaridad pasiva (artículos 1987, 1988 y 1989 del Código Civil) o la fianza (artículo 2794 del Código Civil).



ORTE DE
A NACION
CUERDOS DE
A SALA.

QUINTO.- De lo expuesto en el considerando precedente se llega a la conclusión de que existe la contradicción de tesis denunciada.

Debe precisarse que aunque los antecedentes de los asuntos son distintos y la redacción de las tesis no son del todo afortunadas, se satisfacen los requisitos para determinar que sí existe contradicción de tesis. Pues mientras que en uno de los asuntos se trata de un crédito de habilitación en el que el supuesto avalista suscribió unos pagarés, en el otro se trata de un contrato de factoraje financiero. No obstante, en ambos juicios se cuestiona sobre la aplicabilidad de la figura del aval e implícitamente sobre la forma de responsabilidad que asume quien se obliga con ese carácter en un documento distinto a los títulos de crédito.

En efecto, mientras que el Tercer Tribunal Colegiado afirma que la figura del aval sí puede cobrar aplicabilidad legal fuera de

• los títulos de crédito, ya que si bien es propia de éstos, no existe precepto legal que lo prohíba aunado a que las partes en ejercicio de la autonomía de la voluntad, que es norma suprema de los contratos, libremente pueden pactar tal responsabilidad, por lo que implícitamente se sostiene la no exclusividad del aval para los títulos de crédito; en la ejecutoria y tesis del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil se sostiene lo contrario afirmándose expresamente la exclusividad de la figura del aval para los títulos de crédito, debiéndose entender por tal término la incompatibilidad, exclusión o rechazo que, según aquel órgano colegiado, existe para que dicha garantía cambiaria pueda cobrar aplicación fuera de tales documentos. Por lo anterior, se da la oposición de criterios necesaria para que exista la contradicción de tesis, establecida en el artículo 197-A de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la siguiente jurisprudencia, cuyo rubro y texto se transcribe a continuación:

Novena Época
 Instancia: Segunda Sala
 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
 Tomo: II, Septiembre de 1995
 Tesis: 2a. LXXVIII/95
 Página: 372

**"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PROCEDE SU
 "ANÁLISIS AUNQUE UNO DE LOS CRITERIOS
 "DIVERGENTES SEA IMPLÍCITO, SIEMPRE Y
 "CUANDO EL SENTIDO DE ÉSTE PUEDA
 "DEDUCIRSE INDUBITABLEMENTE. El hecho de
 "que uno de los criterios divergentes materia de la
 "contradicción de tesis denunciada, sea implícito,
 "no impide que pueda analizarse y resolverse la**



**"contradicción planteada, pero para que la
"divergencia tenga jurídicamente los mismos
"efectos que un desacuerdo expreso al resolver
"cuestiones esencialmente iguales, se requiere que
"el sentido atribuido al criterio tácito sea
"indubitable".**

Contradicción de tesis 33/94. Entre los Tribunales Colegiados Primero y Noveno en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 23 de junio de 1995. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: Rosalba Becerril Velázquez.



ORTE DE
A NACIÓN
CHERRIL VELÁZQUEZ
SALA

Por otra parte, conviene precisar que el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil afirma que quien se obliga como aval en un documento o convenio distinto de un título de crédito deberá responder como obligado solidario, de acuerdo a la interpretación de los artículos 1987, 1988 y 1989 del Código Civil; en tanto que el Quinto Tribunal Colegiado determinó que la figura del aval es exclusiva de los títulos de crédito, y que en materia mercantil y civil existen otras figuras de garantía como la fianza y la solidaridad pasiva, sin pronunciarse directamente respecto a cual de aquellas formas tendría aplicabilidad en estos supuestos.

En esas condiciones, queda claro que aun y cuando los antecedentes del caso no son idénticos, sí hubo un pronunciamiento respecto al problema de fondo, esto es, si la figura del aval puede o no cobrar aplicación fuera de los títulos de crédito y la forma cómo debe responder quien se obliga con tal carácter en un contrato mercantil, siendo ambas ejecutorias discrepantes.

Lo anterior encuentra apoyo en la tesis plenaria que en seguida se transcribe con sus respectivos datos de consulta:

Novena Época
Instancia: Pleno
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo: XIII, abril de 2001
Tesis: P./J. 26/2001
Página: 76

**"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES
"COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA
"SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que
"establecen los artículos 107, fracción XIII, primer
"párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la
"Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados
"de Circuito sustenten tesis contradictorias en los
"juicios de amparo de su competencia, el Pleno de
"la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala
"que corresponda deben decidir cuál tesis ha de
"prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen
"tesis contradictorias cuando concurren los
"siguientes supuestos: a) que al resolver los
"negocios jurídicos se examinen cuestiones
"jurídicas esencialmente iguales y se adopten
"posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b)
"que la diferencia de criterios se presente en las
"consideraciones, razonamientos o
"interpretaciones jurídicas de las sentencias
"respectivas; y, c) que los distintos criterios
"provengan del examen de los mismos elementos".**



SECRETARÍA DE JUSTICIA
SECRETARÍA DE INTERIORES
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



158

Contradicción de tesis 1/97. Entre las sustentadas por el Segundo y el Primer Tribunales Colegiados en Materia Administrativa, ambos del Tercer Circuito. 10 de octubre de 2000. Mayoría de ocho votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Disidentes: José Vicente Aguinaco Alemán y Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Francisco Olmos Avilez.

Contradicción de tesis 5/97. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Cuarto Tribunal Colegiado del Sexto Circuito. 10 de octubre de 2000. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame.

Contradicción de tesis 2/98-PL. Entre las sustentadas por el Segundo y Tercer Tribunales Colegiados en Materia Civil del Tercer Circuito. 24 de octubre de 2000. Once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: José Carlos Rodríguez Navarro.



RTE DE
NACION
TERCOS DE
SALA

Contradicción de tesis 28/98-PL. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, el Cuarto Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito. 16 de noviembre de 2000. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Juan N. Silva Mesa. Secretario: Rubén D. Aguilar Santibáñez.

Contradicción de tesis 44/2000-PL. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. 18 de enero de 2001. Mayoría de diez votos. Disidente: Humberto Román Palacios. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: José Luis Vázquez Camacho.

SEXTO.- La materia de la presente contradicción de tesis estriba de modo fundamental en determinar si conforme a derecho la institución jurídica del aval, regulada en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, resulta una garantía mercantil de aplicación única en los títulos de crédito o puede válidamente, en ejercicio de la autonomía de la voluntad, tener aplicación dentro de una relación contractual y en su caso la

forma en cómo ha de responder quien así se obliga dentro de un documento distinto a los títulos de crédito.

El contrato es el acuerdo de voluntades por virtud del cual se crean y transmiten obligaciones o derechos, y constituye la fuente por excelencia de las obligaciones. La legislación mercantil, en específico el Código de Comercio, no cuenta con una regulación integral respecto del régimen jurídico de los contratos mercantiles, debido no solo al reconocimiento en esta materia de la supletoriedad del derecho civil, sino también al fraccionamiento de la codificación mercantil que ha derivado en la existencia de múltiples ordenamientos especiales que regulan multitud de actos y contratos mercantiles, algunos contemplados antiguamente en el propio Código de Comercio. Basta recordar los casos previstos en la Ley General de Sociedades Mercantiles, la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, Ley Federal de Instituciones de Fianzas, etcétera.

Sin embargo, en la substanciación de las controversias relativas a actos mercantiles la parte adjetiva del Código de Comercio, contenida en su Libro V, sigue siendo el ordenamiento procesal aplicable, a través de los juicios ordinarios, ejecutivos y especiales, siempre que la legislación mercantil especial no contenga normas procesales contradictorias, pues en este último caso deberán prevalecer las de la ley especial, en términos de lo dispuesto por el artículo 1054 del Código de Comercio.



El Código de Comercio postula de modo fundamental dos vías procesales distintas para obtener justicia: el juicio ejecutivo y el juicio ordinario. La primera es una vía privilegiada de cobro que tiene lugar cuando la demanda se funda en un documento que traiga aparejada ejecución; mientras que la segunda es una vía general para todos aquellos casos en que no se prevea una tramitación especial. De esta forma la vía ejecutiva tiene como presupuesto indispensable la existencia de un documento al que la ley otorga carácter ejecutivo, reconociéndole pleno valor probatorio y el cual debe contener un crédito líquido y exigible.



¿Qué documentos traen aparejada ejecución? El artículo 1391 del Código de Comercio enumera a los siguientes:

CORTE DE
LA NACION
ACUERDOS DE
A SALA.

"Art. 1391.- El procedimiento ejecutivo tiene lugar

"cuando la demanda se funda en documento que traiga aparejada ejecución.

"Traen aparejada ejecución:

"I. La sentencia ejecutoriada o pasada en autoridad

"de cosa juzgada y la arbitral que sea inapelable,

"conforme al artículo 1346, observándose lo

"dispuesto en el 1348;

"II. Los instrumentos públicos;

"III. La confesión judicial del deudor, según el

"artículo 1288;

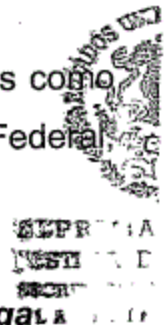
"IV. Los títulos de crédito;

"V. Las pólizas de seguros conforme a la ley de la

"materia;

- "VI. La decisión de los peritos designados en los
"seguros para fijar el importe del siniestro,
"observándose lo prescrito en la ley de la materia;**
- "VII. Las facturas, cuentas corrientes y
"cualesquiera otros contratos de comercio
"firmados y reconocidos judicialmente por el
"deudor, y**
- "VIII. Los demás documentos que por disposición
"de la ley tienen el carácter de ejecutivos o que por
"sus características traen aparejada ejecución".**

Ahora bien, en materia civil, ordenamientos adjetivos como el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, reconocen como títulos ejecutivos los siguientes:



**"Artículo 443.-Para que el juicio ejecutivo tenga
"lugar se necesita un título que lleve aparejada
"ejecución.**

"Traen aparejada ejecución:

**"I.- La primera copia de una escritura pública
"expedida por el juez o notario ante quien se
"otorgó;**

**"II.- Las ulteriores copias dadas por mandato
"judicial, con citación de la persona a quien
"interesa;**



**"III.- Los demás instrumentos públicos que
"conforme al artículo 333 hacen prueba plena;**

**"IV.- Cualquier documento privado después de
"reconocido por quien lo hizo o lo mandó extender;
"basta con que se reconozca la firma aun cuando
"se niegue la deuda;**

A

**"V.- La confesión de la deuda hecha ante juez
"competente por el deudor o por su representante
"con facultades para ello;**

C



CORTE DE
LA NACION
ACUERDOS DE
LA SALA.

**"VI.- Los convenios celebrados en el curso de un
"juicio ante el juez, ya sea de las partes entre sí o
"de terceros que se hubieren obligado como
"fiadores, depositarios, o en cualquier otra forma;**

N
E
E

**"VII.- Las pólizas originales de contratos
"celebrados con intervención de corredor público;**

E

**"VIII.- El juicio uniforme de contadores, si las partes
"ante el juez o por escritura pública, o por escrito
"privado reconocido judicialmente, se hubieren
"sujetado a él expresamente o lo hubieren
"aprobado".**

**"ARTÍCULO 444. Las sentencias que causen
"ejecutoria y los convenios judiciales, los
"convenios celebrados ante la Procuraduría**

***"Federal del Consumidor, los laudos que emita la
"propia Procuraduría y los laudos o juicios de
"contadores, motivarán ejecución, si el interesado
"no intentare la vía de apremio".***

Es oportuno señalar que el legislador, a fin de acelerar la recuperación del capital administrado por las instituciones financieras y fortalecer su liquidez, ha otorgado el carácter de títulos ejecutivos a ciertos contratos mercantiles cuando son adminiculados en juicio con otros documentos, tal es el caso de los contratos de factoraje y habilitación.

El factoraje, en términos del artículo 45-A de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, es aquél contrato que celebra una empresa autorizada de factoraje financiero con sus clientes, personas morales o personas físicas que realicen actividades empresariales, por virtud del cual la primera adquiere de los segundos derechos de crédito relacionados a proveeduría de bienes, de servicios o de ambos, con recursos provenientes de las operaciones pasivas. El carácter ejecutivo de este contrato se desprende de lo dispuesto por el artículo 48 de aquel ordenamiento, el cual se transcribe a continuación:

***"ARTÍCULO 48.- El contrato o documento en que
"se hagan constar los créditos, arrendamientos
"financieros o factoraje financiero que otorguen las
"organizaciones auxiliares del crédito
"correspondientes, así como los documentos que***



**"demuestren los derechos del crédito transmitidos
"a empresas de factoraje financiero, notificados
"debidamente al deudor, junto con la certificación
"del estado de cuenta a que se refiere el artículo
"anterior, serán título ejecutivo mercantil, sin
"necesidad de reconocimiento de firma ni de otro
"requisito alguno".**

La habilitación, por su parte, encuentra su regulación en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, artículos 323 a 333, y se define como el contrato en virtud del cual un sujeto, llamado acreditado, queda obligado a invertir el importe del crédito otorgado por el acreditante, en la adquisición de las materias primas y en el pago de los jornales, salarios y gastos directos de explotación indispensables para los fines de su empresa. El carácter de título ejecutivo viene dado por los artículos 66 y 68 de la Ley de Instituciones de Crédito, mismos que se transcriben:

**"ARTÍCULO 66.- Los contratos de crédito
"refaccionario y de habilitación o avío, que
"celebren las instituciones de crédito, se ajustarán
"a lo dispuesto por la Ley General de Títulos y
"Operaciones de Crédito, y a las bases siguientes:**

**"I. Se consignarán, según convenga a las partes y
"cualquiera que sea su monto, en póliza ante
"corredor público titulado, en escritura pública o en
"contrato privado, que en este último caso se
"firmará por triplicado ante dos testigos y se**

**"ratificará ante notario público, corredor público
"titulado, juez de primera instancia en funciones de
"notario o ante el encargado del Registro Público
"correspondiente;**

**"II. Sin satisfacer más formalidades que las
"señaladas en la fracción anterior, se podrán
"establecer garantías reales sobre bienes muebles
"o inmuebles, además de los que constituyen la
"garantía propia de estos créditos, o sobre la
"unidad industrial, agrícola, ganadera o de
"servicios con las características que se
"mencionan en el artículo siguiente;**

**"III. Los bienes sobre los cuales se constituya la
"prenda, en su caso, podrán quedar en poder del
"deudor en los términos establecidos en el artículo
"329 de la Ley General de Títulos y Operaciones de
"Crédito".**

**"ARTÍCULO 68.- Los contratos o las pólizas en los
"que, en su caso, se hagan constar los créditos que
"otorguen las instituciones de crédito, junto con
"los estados de cuenta certificados por el contador
"facultado por la institución de crédito acreedora,
"serán títulos ejecutivos, sin necesidad de
"reconocimiento de firma ni de otro requisito.**

**"El estado de cuenta certificado por el contador a
"que se refiere este artículo, hará fe, salvo prueba
"en contrario, en los juicios respectivos para la**



**"fijación de los saldos resultantes a cargo de los
"acreditados o de los mutuuarios, en todos los
"casos en que por establecerse así en el contrato:**

**"I. El acreditado o el mutuuario pueda disponer de
"la suma acreditada o del importe de los préstamos
"en cantidades parciales o esté autorizado para
"efectuar reembolsos previos al vencimiento del
"plazo señalado en el contrato, y**



**"II. Se pacte la celebración de operaciones o la
"prestación de servicios, mediante el uso de
"equipos y sistemas automatizados".**

ORTE DE
A NACIÓN
CURRER
A SALA

Es oportuno señalar, que la vía procesal privilegiada atribuida a estos contratos en nada afecta su naturaleza intrínseca, éstos son contratos mercantiles y seguirán siéndolo, no pudiendo asimilarse, en virtud de su simple carácter ejecutivo, con otros institutos legales que poseen esta misma vía procesal preferente.

Esta circunstancia fue advertida de forma conveniente por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil al señalar:

**"Por todo ello es inconcuso que la sala
"responsable incurre en un error manifiesto al
"sostener que como el contrato de factoraje base
"de la acción es un título ejecutivo en términos del
"artículo 48 de la ley de la materia, le es aplicable,
"la figura del aval; pues se repite esa figura jurídica**

"no es aplicable a cualquier clase de título ejecutivo, ya que es típica y exclusiva de los títulos de crédito a que se refiere la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, entre los que no se encuentra el título ejecutivo base de la acción".

En consecuencia, sería desacertado derivar que del mero carácter procesal-ejecutivo que poseen ambos, títulos ejecutivos y títulos de crédito, les resultan aplicables a los primeros, con independencia de los negocios jurídicos en ellos consignados (convenios, contratos, declaración unilateral de voluntad) las instituciones jurídicas correspondientes a otra clase distinta de negocios jurídicos, como lo son los títulos de crédito, los cuales poseen una naturaleza peculiar por tratarse de instituciones pertenecientes al derecho cambiario.

ESTADOS UNIDOS
SECRETARÍA DE
JUSTICIA
LA F. M. E.

Toca ahora examinar si las partes pueden emplear válidamente, en ejercicio de la autonomía de la voluntad, una figura de garantía prevista, en principio, sólo para los títulos de crédito.

La función jurídica de los títulos de crédito es la de ser representativos de la riqueza mobiliaria e inmobiliaria facilitando su circulación. Se ha afirmado que a través de ellos el mundo moderno puede movilizar sus propias riquezas, gracias a ellos el derecho consigue vencer el tiempo y el espacio, transportando, representados en esos títulos, bienes distantes y materializando en el presente riquezas futuras. Estos títulos poseen un régimen jurídico particular, derivado de sus características de literalidad,



incorporación, autonomía, abstracción y circulación, plasmado en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

En nuestro sistema jurídico la garantía cambiaria por antonomasia es el aval, el cual encuentra su regulación en los artículos 109 a 116 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, correspondientes al Título Primero, Capítulo Segundo denominado "De la Letra de Cambio". Así pues la figura del aval se halla prevista y regulada como una forma de garantía propia de los títulos de crédito.



ORTE DE
A NACIÓN
ACUERDOS DE
A SALA

Esta institución fue desarrollada por el derecho mercantil como una forma particular de responsabilidad patrimonial que protegiera el intercambio de títulos-valor y que sin entorpecer o retardar su circulación, otorgara al beneficiario la máxima seguridad en la satisfacción de su crédito. Esta circunstancia implica efectos jurídicos peculiares que hacen del aval una forma *sui generis* de garantía mercantil y que permiten distinguirla de otros institutos de garantía. A continuación se enuncian algunas características particulares de esta garantía mercantil:

a) El contenido de la obligación del aval puede ser únicamente una prestación económica de dar, que se resuelve en la satisfacción de una suma determinada de dinero contenida en el título. Así el contenido de la obligación del aval es siempre cambiario, no pudiendo formar parte del contenido obligacional del aval cláusulas que desnaturalicen el carácter cambiario del acto o que sean incompatibles con él. De ahí que el aval no

importe, naturalmente, una garantía de las relaciones extracartulares del avalado.

b) El aval es un acto unilateral y no receptivo. La obligación del avalista es perfecta, irrevocable e incondicionada desde su origen, sin que tales calidades se adquieran después de ninguna aceptación, expresa o tácita.

c) En el aval, al ser un acto cambiario, la obligación que se asume es abstracta, es decir, que su relación circulatoria prescinde, se desvincula de la causa e incluso resulta válida aún cuando la obligación garantizada sea nula por cualquier causa.

d) El avalista adquiere una obligación directa y personal, no la de su avalado, y responde por el pago de la letra, en todo o en parte no por el cumplimiento de aquél.

e) Es formal y escrito, el aval debe manifestar su voluntad con indicación de las palabras "por aval" u otra equivalente y su firma, haciéndose constar ya sea en el mismo instrumento o en otro documento adherido. Aunque la ley crea un supuesto de presunción de aval cuando consta una firma en el instrumento y no puede atribuírsele otro sentido.

En la ejecutoria del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito se argumenta que:

***"...como el artículo 78 del Código de Comercio,
"permite que, en las convenciones mercantiles***

164



ORTE DE
NACION
JERDOS DE
SALA.

"cada uno se obliga en la manera y términos que
 "aparezca que quiso obligarse, sin que la validez
 "del acto comercial dependa de la observancia de
 "formalidades o requisitos determinados, basta que
 "haya aceptado la calidad de aval en el contrato de
 "habilitación, para que deba responder con esa
 "calidad, porque si bien el aval es una institución
 "propia de los títulos de crédito, en términos del
 "artículo 109 de la Ley General de Títulos y
 "Operaciones de Crédito, no hay precepto legal que
 "prohíba adquirir esa calidad de aval respecto de
 "un contrato de habilitación, y por el contrario, en
 "materia mercantil el artículo 78 del Código de
 "Comercio otorga el reconocimiento a la voluntad
 "de las partes como norma suprema en los
 "contratos, al establecer que cada uno se obliga en
 "los términos que aparezca que quiso obligarse; de
 "modo que esa institución del aval en el contrato
 "de habilitación implica que el suscriptor con ese
 "carácter adquiere el carácter de obligado solidario,
 "en términos de los artículos 1984, 1987, 1988 y
 "1989 del Código Civil para el Distrito Federal. Por
 "lo tanto, la institución del aval, aunque está
 "prevista para los títulos de crédito, cuando se
 "utiliza con algún otro contrato como el de la
 "especie, debe interpretarse en el contexto del
 "documento y considerarse que en realidad es un
 "obligado solidario, quien prestó su voluntad al
 "suscribir el acto jurídico, no puede en un juicio

"desconocer su obligación solidaria, porque falta a la buena fe, ni el órgano jurisdiccional puede eximirlo de la obligación por ser una cuestión formal".

Conviene advertir, que el criterio anterior contiene cierta incongruencia pues si bien el Tribunal se pronuncia aceptando la aplicabilidad de la figura del aval en el contrato de habilitación, afirmando que no obstante ser propia de los títulos de crédito las partes libremente, fundadas en la libertad contractual, pueden pactar tal responsabilidad cambiaria en un contrato mercantil, más adelante se muestra inconsistente con tal postura, ya que interpretando la voluntad de las partes, a la que de modo previo había reconocido plena eficacia jurídica para obligarse en calidad de aval en un contrato, efectúa ahora un reenvío a la normatividad civil supletoria, relativa a la solidaridad pasiva, y no a la normatividad mercantil relativa al aval contenida en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, pues la solidaridad mercantil atribuida al avalista posee diferencias de la correspondiente a la solidaridad civil y no debe, por tanto, remitirse de forma inmediata a la legislación supletoria.

Por otra parte, esta postura desatiende ciertos postulados de la teoría del acto jurídico así como las normas referentes a la interpretación contractual.

En efecto, el hecho de que no exista precepto legal que prohíba adquirir la calidad de aval respecto de un contrato de habilitación y que el artículo 78 del Código de Comercio

165



reconozca a la autonomía de la voluntad como la ley suprema de los contratos, no implica en forma alguna que aquélla sea capaz de alterar el peculiar régimen jurídico de las instituciones que la ley mercantil ha instaurado a fin de adaptarlas o combinarlas artificiosamente entre sí, pues con ello quedaría alterada la congruencia y sistemática que orientan a las diversas instituciones jurídicas mercantiles.

A



ORTE DE
A NACION
GUERDAS DE
1 SALE

En este supuesto en particular, se presenta de modo claro lo que la doctrina ha denominado imposibilidad jurídica. Imposible jurídico —señala Ferrara— es aquello que por el ordenamiento del derecho positivo no puede verificarse y es incompatible y contradictorio con la existencia del derecho. Por lo mismo, lo imposible jurídico se resuelve en una acción inútil al desconocer la voluntad de las partes ciertos supuestos o categorías lógico-jurídicos que necesariamente deben regir, intervenir o validar la institución jurídica o acto para que éste produzca las consecuencias de derecho esperadas. Lo imposible jurídico resulta de una contradicción o incongruencia, en ocasiones insalvable, que atenta contra la esencia de una relación jurídica o la lógica de una institución. Casos típicos son los convenios para hacer irrevocable un testamento, pactar un arrendamiento perpetuo, poner plazo a un matrimonio, la compraventa de los derechos de patria potestad sobre un menor, etcétera. Todas ellas conllevan formas que distorsionan la naturaleza y principios esenciales que conforman y dan sentido a las instituciones y a las relaciones jurídicas generadas dentro de un sistema jurídico determinado.

La autonomía de la voluntad, se reitera, no puede desnaturalizar el contenido de las instituciones jurídicas alterando la propia técnica jurídica que determina su estructura y operación dentro del orden jurídico. Lo contrario sería admitir que los particulares en uso de la libre contratación se hallan facultados para derogar o modificar el régimen jurídico de los diversos institutos legales, desconociendo las categorías y presupuestos que necesariamente han de regirlos, alterando el orden y coherencia que debe prevalecer para el adecuado funcionamiento del sistema jurídico en su conjunto.

De esta forma, la eventual aplicación artificiosa de la figura del aval en otra clase de negocios jurídicos, distintos de las obligaciones cambiarias, sólo conduciría a desnaturalizar la propia figura del aval, generando perniciosas consecuencias jurídicas de difícil reparación. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis que a continuación se transcribe:

Quinta Época
 Instancia: Tercera Sala
 Fuente: Semanario Judicial de la Federación
 Tomo: XXXV
 Página: 1237

**"CONTRATOS, VOLUNTAD DE LAS PARTES EN
 "LOS. Si bien es verdad que la voluntad de las
 "partes, es la suprema ley de los contratos,
 "también lo es que dicho principio tiene dos
 "limitaciones forzosas, ineludibles: la primera, que
 "se deriva del interés público que está por encima
 "de la voluntad individual, y la segunda de la**



**"técnica jurídica, sobre la que tampoco puede
"prevalecer el capricho de los contratantes".**

Amparo civil directo 3781/30. Espinosa Manuela y coagraviados. 12 de julio de 1932. Mayoría de tres votos. Disidentes: Joaquín Ortega y Ricardo Couto. La publicación no menciona el nombre del ponente.

Ahora bien, cuando el empleo de la palabra AVAL aparece como una especie de cobertura económica para garantizar un negocio distinto de la letra de cambio u otro título de crédito, tal circunstancia debe atribuirse más bien al desconocimiento jurídico de las partes respecto del peculiar régimen legal que posee ese instituto de garantía en materia mercantil. Es frecuente que personas no versadas en la ciencia del derecho empleen de forma cotidiana la palabra aval como sinónimo genérico de garantía o fianza, sin hacer otra distinción ni reparar en sus particularidades jurídicas específicas. Este sentido popular del vocablo es de uso extendido y se utiliza en gran variedad de contratos, incluso civiles, por lo común elaborados sin el adecuado asesoramiento de peritos en derecho que pudieran evidenciar esta falta de técnica jurídica en la redacción de las cláusulas contractuales.

§

Por otra parte, si bien en la ejecutoria del Quinto Tribunal Colegiado dicho órgano no se pronunció directamente en cuanto al tipo particular de responsabilidad que adquiriría quien se obliga en calidad de aval en un contrato mercantil, señalando que: "...si se toma en cuenta que las obligaciones de carácter civil o mercantil (que no deriven de un título de crédito), admiten ser garantizadas en su pago, por un tercero, a través del contrato de

fianza a que se refiere el artículo 2794 del Código Civil para el Distrito Federal, o bien a través de la institución jurídica de la solidaridad pasiva a que se refieren los artículos relacionados 1987, 1988 y 1989 del Código Civil en cita, la cual solidaridad no se presume..."; el Tercer Tribunal Colegiado sí lo hizo, estimando que aquellos casos dicho garante debería responder como un obligado solidario.

Esta Primera Sala no ignora que de hacerse a un lado el estudio de dicha situación, pronunciándose tan sólo en cuanto a la aplicabilidad o no de la figura del aval en los contratos mercantiles, pero sin abordar lo relativo a la forma en que eventualmente respondería tal garante, sólo generaría graves perjuicios, ya que se estaría dando pie a múltiples abusos por parte de contratantes inescrupulosos que, habiendo consentido de forma libre garantizar cierto negocio con su patrimonio, invocarían luego dicho criterio, aduciendo la ineficacia jurídica de dicha garantía y solicitando su exoneración judicial ante la falta de un pronunciamiento específico sobre la materia. De ahí la necesidad de tal pronunciamiento, el que, por otra parte, tan sólo sería consecuente con las elementales implicaciones y consecuencias jurídicas que subyacen en la propia contradicción denunciada, permitiendo resolver de forma integral la problemática planteada. Sirve de apoyo a lo anterior la siguiente tesis cuyo rubro y datos de localización se transcriben:

Octava Época
Instancia: Cuarta Sala
Fuente: Apéndice de 1995



167

Tomo: Tomo VI, Parte SCJN
 Tesis: 185
 Página: 126

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. NO TIENE QUE
 "RESOLVERSE INVARIABLEMENTE DECLARANDO
 "QUE DEBE PREVALECER UNO DE LOS
 "CRITERIOS QUE LA ORIGINARON, PUESTO QUE
 "LA CORRECTA INTERPRETACIÓN DEL
 "PROBLEMA JURÍDICO PUEDE LLEVAR A
 "ESTABLECER OTRO. La finalidad perseguida por
 "los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución
 "Federal y 197-A de la Ley de Amparo, al otorgar
 "competencia a las Salas de la Suprema Corte de
 "Justicia de la Nación para resolver las
 "contradicciones de tesis que surjan entre los
 "Tribunales Colegiados de Circuito, estableciendo
 "cuál tesis debe prevalecer, es la de preservar la
 "unidad en la interpretación de las normas que
 "integran el orden jurídico nacional, fijando su
 "verdadero sentido y alcance, lo que, a su vez,
 "tiende a garantizar la seguridad jurídica; tan
 "importante y trascendental propósito se tornaría
 "inalcanzable si se llegara a concluir que la
 "Suprema Corte de Justicia de la Nación está
 "obligada, inexorablemente, a decidir en relación
 "con el criterio que se establece en una de las tesis
 "contradictorias, a pesar de considerar que ambas
 "son incorrectas o jurídicamente insostenibles. Por
 "consiguiente, la Suprema Corte válidamente

***"puede acoger un tercer criterio, el que le parezca
"correcto, de acuerdo con el examen lógico y
"jurídico del problema, lo que es acorde, además,
"con el texto de las citadas disposiciones en
"cuanto indican que la Sala debe decidir "...cuál
"tesis debe prevalecer", no, cuál de las dos tesis
"debe prevalecer".***

Contradicción de tesis 1/91. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito y el Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito. 1o. de julio de 1992. Cinco votos.

Contradicción de tesis 24/91. Entre las sustentadas por el Primero y Segundo Tribunales Colegiados del Décimo Noveno Circuito. 1o. de julio de 1992. Cinco votos.

Contradicción de tesis 34/92. Entre las sustentadas por el Tercero y Quinto Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 18 de enero de 1993. Cinco votos.

Contradicción de tesis 35/92. Entre las sustentadas por el Primer y Octavo Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 12 de abril de 1993. Cinco votos.

Contradicción de tesis 80/90. Entre las sustentadas por el Sexto y Séptimo Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 3 de mayo de 1993. Cinco votos.

NOTA:

Tesis 4a./J.2/94, Gaceta número 74, pág. 19; véase ejecutoria en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XIII-Febrero, pág. 103.

De determinarse lo contrario, atendiendo a un fino sentido formalista, se solucionaría tan sólo parcialmente la presente problemática y la resolución de la contradicción de tesis denunciada no cumpliría cabalmente con su objeto de brindar seguridad jurídica a los gobernados.

168



Así pues, cuando quede evidenciada esta falta de técnica jurídica en la redacción de los contratos, como ocurre en este caso, el juzgador deberá remitirse a la interpretación jurídica del documento en su conjunto, pues el uso equívoco del término aval no debe frustrar la intención real de las partes ni ser vehículo para liberar de responsabilidad, libremente asumida, a uno de los participantes involucrados en el acto, pues sólo en el caso de que en un contrato no pueda venirse al conocimiento de la verdadera intención o voluntad de las partes deberá declararse nulo. Lo anterior, con fundamento en el Código Civil Federal, cuyos numerales relativos a la interpretación contractual son de aplicación supletoria, mismos que se reproducen a continuación:



"ARTÍCULO 1851.- Si los términos de un contrato son claros y no dejan duda sobre la intención de los contratantes, se estará al sentido literal de sus cláusulas.

"Si las palabras parecieren contrarias a la intención evidente de los contratantes, prevalecerá ésta sobre aquéllas".

"ARTÍCULO 1852.- Cualquiera que sea la generalidad de los términos de un contrato, no deberán entenderse comprendidos en él cosas distintas y casos diferentes de aquéllos sobre los que los interesados se propusieron contratar".

"ARTÍCULO 1853.- Si alguna cláusula de los contratos admitiere diversos sentidos, deberá

**"entenderse en el más adecuado para que
"produzca efecto".**

**"ARTÍCULO 1854.- Las cláusulas de los contratos
"deben interpretarse las unas por las otras,
"atribuyendo a las dudosas el sentido que resulte
"del conjunto de todas".**

**"ARTÍCULO 1855.- Las palabras que pueden tener
"distintas acepciones serán entendidas en aquella
"que sea más conforme a la naturaleza y objeto del
"contrato".**

**"ARTÍCULO 1856.- El uso o la costumbre del país
"se tendrán en cuenta para interpretar las
"ambigüedades de los contratos".**



SECRETARÍA
DE JUSTICIA
SECRETARÍA DE
LA FAMILIA

**"ARTÍCULO 1857.- Cuando absolutamente fuere
"imposible resolver las dudas por las reglas
"establecidas en los artículos precedentes, si
"aquéllas recaen sobre circunstancias accidentales
"del contrato, y éste fuere gratuito, se resolverán
"en favor de la menor transmisión de derechos e
"intereses; si fuere oneroso se resolverá la duda en
"favor de la mayor reciprocidad de intereses.**

**"Si las dudas de cuya resolución se trata en este
"artículo recayesen sobre el objeto principal del
"contrato, de suerte que no pueda venirse en
"conocimiento de cuál fue la intención o la**



**"voluntad de los contratantes, el contrato será
"nulo".**

En el caso que nos ocupa, consta expresamente el deseo de uno de los participantes en el negocio de garantizar las obligaciones convenidas, no obstante que éste haya sido manifestado con técnica jurídica deficiente al recurrir en su denominación a una figura jurídica de garantía que no tiene aplicación en el ámbito contractual, pues no debe desatenderse que la ley dispone para estos casos fórmulas de interpretación que privilegian la intención real de las partes sobre las palabras empleadas. De esta forma, si alguna cláusula en los contratos admitiese diversos sentidos, deberá entenderse en el más adecuado para que produzca efectos; y si algún término tuviere diversas acepciones será entendido en aquél que sea más conforme con la naturaleza y objeto del contrato.



ORTE DE
A NAC
CUERPO DE
A BABA

Precisado lo anterior, corresponde ahora analizar el tipo de responsabilidad que asume quien aparece como aval en un contrato mercantil.

La responsabilidad solidaria resulta de la ley o de la clara voluntad de las partes de obligarse en ese sentido y en este caso particular no existen elementos que permitan concluir llanamente un juicio de solidaridad pasiva, pues dentro del documento elaborado por las partes únicamente fue empleado el término aval, sin ningún adjetivo o elemento adicional, aunado a que en términos del artículo 1998 del Código Civil, de aplicación supletoria, **no cabe presumir esta responsabilidad**. Es decir, la

propia ley prohíbe taxativamente que a partir de simples indicios, ligados con los hechos, se llegue a tal conjetura debido a la gravedad que implica la asunción de este tipo de responsabilidad patrimonial, por ello la ley requiere para su existencia, siempre y de forma indefectible, una declaración expresa. Por tanto, no resulta eficaz para la determinación de su existencia la interpretación por analogía ni la basada en presunciones.

Por otra parte cabe destacar que si bien el artículo 114 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito señala que el avalista es un obligado solidario de aquel cuya firma ha garantizado, la figura del aval es una solidaridad especial, de tipo cambiario, derivada de la particular naturaleza de los títulos de crédito y diferenciada de la solidaridad civil.

En efecto, del examen comparativo de los preceptos que regulan la solidaridad y el aval, tanto en el Código Civil Federal como en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, respectivamente, se advierte que:

- a) La solidaridad es por definición una modalidad que implica pluralidad de sujetos activos o pasivos, o ambos, respecto de una misma obligación; en donde cualquier acreedor (activa) puede exigir a cualquier deudor (pasiva), el cumplimiento de la misma, con la particularidad de que su cumplimiento extingue la obligación entre los acreedores y los deudores. En cambio, el aval constituye una institución netamente de garantía de títulos de crédito.



b) La solidaridad no se presume, el aval sí.

c) Nada impide que la solidaridad se pacte en documento distinto al de la obligación relativa; en cambio, el aval debe constar en el cuerpo del documento o en hoja adherida a él.

d) Si la obligación sobre la que existe pluralidad de sujetos es nula, ello hace carecer de sentido jurídico a la solidaridad, lo que no acontece con el aval, en el que a pesar de que la obligación del avalado sea nula, sería válida la del avalista.

e) Es posible que la solidaridad se pacte bajo condición; en el aval esto no es jurídicamente permisible.

f) En la solidaridad todos los obligados se encuentran en un mismo plano y por regla general lo que beneficia a uno también lo reportan los demás; en el aval, el avalista queda obligado (solidariamente) sólo con aquél cuya firma ha garantizado, con independencia de la suerte de los demás obligados cambiarios.

g) El deudor solidario que paga por entero la deuda puede repetir en contra de los demás codeudores, pero a prorrata; el avalista que paga tiene acción por el valor total de lo pagado.



Por lo tanto, de la sola expresión "aval", empleada de forma aislada en el instrumento contractual, no puede derivarse llanamente un juicio de solidaridad pasiva al no existir de forma expresa e indubitable la asunción de tal responsabilidad patrimonial. Por ello se reitera, que si bien en materia de títulos de crédito la solidaridad cambiaria cabe presumirse no sucede lo mismo en la materia civil que lo prohíbe tajantemente; en consecuencia el uso equívoco del término "aval" no puede interpretarse en el sentido de un obligado civil solidario, pues esta responsabilidad o existe de forma explícita o no puede tener lugar.

Es así que esta Primera Sala estima que en estas circunstancias el instituto de garantía más conforme con la naturaleza y objeto de los contratos mercantiles, así como con la intención real de las partes, salvo que pueda derivarse otro sentido de las cláusulas del documento analizado, es el instituto de la fianza. Lo anterior, tomando en consideración que la fianza resulta la figura más usual e idónea, dentro de las formas convencionales de garantía, para que un tercero responda por el incumplimiento contractual de la amplia gama de prestaciones que pueden estipularse como parte de una relación contractual, aunado a lo antes dicho con relación a ser esta figura (la fianza) la que el entendimiento popular confunde ordinariamente con el instituto del aval, equiparando a ambas tal y como si se tratase de figuras semejantes.

Por último, a fin de ilustrar en mejor forma las diferencias entre el contrato de fianza y el aval, se presenta a continuación



una relación comparativa entre estas dos instituciones:

- a) La fianza puede recaer sobre obligaciones cuyo contenido sea de cualquier tipo —dar, hacer o no hacer—, en cambio el aval únicamente puede garantizar obligaciones cambiarias en numerario. El aval, de esta forma, no garantiza ninguna obligación extracartular del avalado.
- b) El aval es siempre mercantil mientras que la fianza sigue la calidad de la obligación garantizada.
- c) El avalista se convierte en deudor cambiario, por ello queda obligado solidariamente frente a todo portador; el fiador es deudor común, pudiendo serlo con obligación sólo subsidiaria y simplemente mancomunada o bien con obligación solidaria.
- d) El ejercicio de la responsabilidad contra el avalista no requiere excusión ni interpelación judicial previa al avalado; en la fianza civil existe el derecho de excusión previa del deudor principal y aun de los otros coafianzados.
- e) En el aval no existe el beneficio de división; la fianza civil admite este beneficio en la especie no solidaria.
- f) La nulidad o anulabilidad de la obligación avalada, que no provenga de vicios de forma, no afecta al aval; esos vicios en la obligación afianzada afectan la fianza, haciéndola nula o anulable a su vez.



ORTE DE
NACION
JUECES DE
SALA

- g) La obligación del avalista es directa e independiente; la del fiador es siempre accesoria.
- h) El aval no puede retractarse; el fiador puede hacerlo, cuando no se aceptó su oferta o cuando se trata de operaciones futuras, en ciertos casos.
- i) El aval debe referirse a operación cambiaria determinada (aun cuando se otorgue en conjunto para varios documentos); la fianza puede referirse a operaciones futuras e indeterminadas, hasta un monto cierto o incierto.
- j) En ciertas circunstancias, la ley presume la existencia del aval (cuando la sola firma consta sin poderse inferir otro sentido).
- k) El aval no tiene derecho a ser relevado de su garantía; el fiador puede ser exonerado de ella.
- l) El aval se constituye sólo por la declaración cartular; la fianza tiene un origen convencional, legal o judicial.
- m) Si el avalista quiebra, el portador no puede requerir se le presente otro en su lugar; en la fianza, en tal caso, se puede requerir otro fiador.

El aval tiene así una regulación jurídica propia, independiente de otras figuras de garantía y exclusiva en sí misma, en tanto que por sus efectos y finalidades sólo es susceptible de aplicación a las obligaciones cambiarias.



En las relatadas condiciones debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio que sustenta esta Primera Sala en la presente resolución, debiendo quedar redactado con el siguiente rubro y texto:

AVAL. AL CONSTITUIR UNA GARANTÍA MERCANTIL DE APLICACIÓN EXCLUSIVA A LOS TÍTULOS DE CRÉDITO, A QUIEN ASÍ SE OBLIGUE EN UN CONTRATO MERCANTIL, DEBE TENÉRSELE, CONFORME A LA NATURALEZA Y OBJETO DE ESTE TIPO DE CONTRATOS, COMO FIADOR, SALVO QUE DE LA INTERPRETACIÓN DE SUS CLÁUSULAS PUEDA DERIVARSE OTRO INSTITUTO DE GARANTÍA.

En nuestro sistema jurídico la figura del aval encuentra su regulación en los artículos 109 a 116 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, correspondientes al título primero, capítulo segundo, denominado 'De la letra de cambio'; así, esta institución se halla prevista y regulada como una garantía de tipo cambiario, por lo que su aplicación es exclusiva a los títulos de crédito. Ahora bien, cuando el empleo de la palabra 'aval' aparece como una especie de cobertura económica para garantizar un negocio distinto de la letra de cambio u otro título de crédito, esta circunstancia debe atribuirse al desconocimiento jurídico de las partes respecto del peculiar régimen legal que posee ese instituto de

SECRETARÍA DE
JUSTICIA
FEDERAL

garantía en materia mercantil, por lo que cuando quede evidenciada esta falta de técnica jurídica en la redacción de los contratos, el juzgador deberá acudir a la interpretación del documento en su conjunto, pues el uso equívoco del término "aval" no debe frustrar la intención real de las partes ni ser el vehículo para liberar de responsabilidad, libremente asumida, a uno de los contratantes, por lo que atento a las reglas de interpretación contractual contenidas en el Código Civil Federal, de aplicación supletoria, las cuales privilegian la verdadera intención de las partes sobre el empleo equívoco de las palabras, si alguna cláusula en los contratos admitiese diversos sentidos, deberá entenderse el más adecuado para que produzca efectos, y si algún término tuviere diversas acepciones, será entendido en aquel que sea más conforme con la naturaleza y el objeto del contrato. En este sentido, esta Primera Sala estima que en estos casos el instituto de garantía más conforme con la naturaleza y objeto de los contratos mercantiles, así como con la intención real de las partes, salvo que pueda derivarse otro sentido de las cláusulas del contrato en cuestión, es el instituto de la fianza.

Por lo expuesto y fundado se resuelve:



PRIMERO. Existe la contradicción de tesis a que se refiere este expediente.

SEGUNDO.- Debe prevalecer con el carácter de jurisprudencia la tesis sustentada por esta Primera Sala.

TERCERO.- Dése publicidad a la tesis, en los términos del artículo 195 de la Ley de Amparo.

Notifíquese; envíese testimonio de la presente resolución a cada uno de los Tribunales Colegiados de Circuito cuyas ejecutorias se examinaron y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.

Así lo resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cinco votos de los señores Ministros Juventino V. Castro y Castro, Humberto Román Palacios, José de Jesús Gudiño Pelayo (Ponente), Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Presidente Juan N. Silva Meza, por lo que se refiere a los puntos primero y tercero resolutivos; y por mayoría de cuatro votos, con voto en contra de la Señora Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas, por cuanto se refiere a el segundo punto resolutivo.

La señora Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas, expresó que formulará voto particular.

Firman el Ministro Presidente de la Sala y el Ministro Ponente con el Secretario de Acuerdos que autoriza y da fe.

PRESIDENTE

MINISTRO JUAN N. SILVA MEZA

PONENTE

MINISTRO JOSÉ DE JESÚS GUDIÑO PELAYO

EL SECRETARIO DE ACUERDOS
DE LA PRIMERA SALA:

ESTADOS UNIDOS
SECRETARÍA DE
JUSTICIA
LA PAZ

LIC. MANUEL DE JESÚS SANTIZO RINCÓN.

Esta foja corresponde a la CONTRADICCIÓN DE TESIS 73/2001-PS ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER Y QUINTO TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Fallado el día veinte de marzo de dos mil dos, en el sentido siguiente: **PRIMERO.** Existe la contradicción de tesis a que se refiere este expediente. **SEGUNDO.-** Debe prevalecer con el carácter de jurisprudencia la tesis sustentada por esta Primera Sala. **TERCERO.-** Dése publicidad a la tesis, en los términos del artículo 195 de la Ley de Amparo. Conste.

17 JUN. 2002 por lista de la misma
fecha, se notificó el acuerdo anterior a
los interesados. Conste.

Siendo las catorce horas de la fecha antes
indicada, y en virtud de no haber com-
parecido los interesados a dar notificaciones,
se tiene por hecha dicha notificación por
medio de lista. Doy fe.



VOTO PARTICULAR QUE FORMULA LA SEÑORA MINISTRA OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS EN LA CONTRADICCIÓN DE TESIS 73/2001-PS, ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER Y QUINTO TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO, PRONUNCIADA POR LA PRIMERA SALA, EL VEINTE DE MARZO DE DOS MIL DOS.



Considero que el punto de la contradicción se presenta porque el Quinto Tribunal Colegiado, sostiene que la figura del "aval" es exclusiva de los títulos de crédito, por tanto, la persona que suscriba un contrato mercantil (contrato de factoraje financiero) en su carácter de "aval", no tiene porqué considerársele con tal carácter y por ello no tiene obligación alguna, por lo que se le libera de cualquier obligación o responsabilidad; además señaló que las obligaciones de carácter civil o mercantil admiten ser garantizadas mediante obligación solidaria o fianza.



ORTE DE
A NACIÓN
COURDO DE
A SALA

Por su parte, el Tercer Tribunal Colegiado indica que no obstante que la figura del "aval" es exclusiva de los títulos de crédito, no existe precepto que prohíba adquirir la calidad de "aval" respecto de un contrato de habilitación, por lo que cuando se utiliza dicha figura jurídica en un contrato de esa naturaleza, debe interpretarse en el contexto del documento y considerarse que en realidad sea un obligado solidario; máxime que, además de su firma en el contrato, además garantizó la obligación contraída con la suscripción de un pagaré; por consiguiente no lo

eximió de responsabilidad u obligación por el hecho de haber firmado como aval.

Esto es, la contradicción surge precisamente porque un Tribunal Colegiado sostiene la exclusividad de la figura del "aval" a los títulos de crédito, por tanto exime de toda responsabilidad a quien firmó como "aval" un contrato mercantil; mientras que el otro tribunal sostiene que, no obstante que la figura del "aval" es exclusivo de los títulos de crédito, no puede desconocerse la obligación o responsabilidad de quien firma con ese carácter un contrato mercantil.

Por tanto, disiento del sentido mayoritario de los señores Ministros, ya que la resolución, que no se comparte, indica que la contradicción surge porque en ambos juicios se cuestiona sobre la aplicabilidad de la figura jurídica del "aval" e, implícitamente sobre la forma de responsabilidad que asume quien se obliga con ese carácter en un documento distinto a los títulos de crédito

Ello es inexacto, ya que el único tribunal que se pronunció sobre el tipo de responsabilidad que debe tener quien suscribe un contrato con el carácter de "aval", lo fue el Tercer Tribunal Colegiado, quien determinó que tenía que ser obligado solidario.

El Quinto Tribunal Colegiado nunca se pronunció al respecto, ya que sólo indicó, que la figura del "aval" es exclusiva de los títulos de crédito y consecuentemente carecía de sustento legal lo afirmado por la Sala responsable en el sentido de que, el "aval" tiene aplicación en cualquier relación jurídica o mercantil,

CONTRADICCION DE TESIS 73/2001-PS

175



situación que se corroboraba, si se tomaba en cuenta que las obligaciones de carácter civil y mercantil admiten ser garantizadas en su pago, por un tercero, a través del contrato de fianza o a través de la institución jurídica de la solidaridad pasiva; es decir, no se pronunció en forma concreta sobre cuál de las dos figuras resultaba aplicable, dejando abierta la posibilidad de que cualquiera de las dos figuras jurídicas pudiesen ser aplicables.

Es de suma importancia señalar que el Tercer Tribunal Colegiado, para considerar obligado solidario a la persona que firmó el contrato mercantil con el carácter de "aval", se basó en que, éste, además de haber firmado ese contrato, también suscribió para garantizar el cumplimiento de la obligación garantizada, un pagaré, situación que se hizo patente en la propia tesis derivada del criterio sostenido por el citado órgano colegiado; es decir, vinculó ambos documentos para ubicar al demandado como obligado solidario.

Mientras que el asunto resuelto por el Quinto Tribunal Colegiado, éste de manera alguna se pronunció sobre la existencia o no de algún tipo de pagaré o título de crédito.

Por tanto, no se dieron los elementos para la existencia de la contradicción de tesis a que alude la jurisprudencia del Tribunal Pleno P./J. 26/2001, cuyo rubro señala: "CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA", ya que no están examinando cuestiones jurídicas iguales, ni los criterios provienen del examen de los mismos elementos y, como consecuencia,

tampoco existen diferentes consideraciones o interpretaciones jurídicas.

Por otra parte, al determinarse sobre qué tipo de garantía debe asumir quien suscribe un contrato mercantil con el carácter de "aval", además de no formar parte de la contradicción, se están introduciendo elementos que ninguno de los Tribunales Colegiados contendientes tomó en cuenta; como el contenido de las cláusulas de cada uno de los contratos y por ello, evidentemente altera la materia de la contradicción, pues se está resolviendo en base a cuestiones hipotéticas.

Como lo señalé al principio de mi voto, no comparto el sentido de la sentencia de la mayoría en muchas de las consideraciones que se contienen en ella.



Para resolver el punto de contradicción que sí se presenta, en principio es necesario señalar que, el artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito, refiere que el título es ejecutivo en contra de los acreditados o mutuuarios, por los saldos especificados en el estado de cuenta certificado por el contador facultado de la institución, ya que son estas personas los titulares de los créditos concedidos por dichas instituciones.

Así, la obligación principal de pago surge del derecho personal o de crédito derivado del contrato particular que se haya celebrado; así, por ejemplo, en el contrato de apertura de crédito de habilitación, el acreditado se encuentra obligado a pagar las sumas de las que haya dispuesto, por virtud de que él adquirió el

CONTRADICCION DE TESIS 73/2001-PS

176



carácter de acreditado, es decir, él se obligó directamente al pago.

Este tipo de operaciones, por lo general se contrata con algún tipo de garantía, como pueden ser: la responsabilidad solidaria, la fianza, la hipoteca, con la suscripción de pagarés por parte del aval.

Así, cuando una persona garantiza el cumplimiento de una obligación por alguno de los anteriores medios, no hay duda que debe responder por la obligación contraída con independencia de que el medio de garantía adoptado, no sea la figura jurídica adecuada al tipo de acto jurídico celebrado, pues sostener lo contrario, equivaldría a eximirlo de cualquier obligación o responsabilidad, no obstante haber manifestado, al estampar su firma, su voluntad de responder, en caso de incumplimiento por parte del obligado principal.



ESTE DOCUMENTO
NO DEBE SER
USADO PARA
NADA

Por tanto, en mi opinión, cuando se reclama en la vía ejecutiva mercantil, el pago por el incumplimiento de un contrato mercantil, que constituye título ejecutivo, tanto al deudor principal como a la persona que suscribió en su carácter de "aval" un contrato mercantil, como los que se cuestionaron (contrato de apertura de crédito de habilitación y contrato de factoraje financiero), no debe eximirse de responsabilidad u obligación a este último, como lo sostuvo el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, sino que por el simple hecho de que haya otorgado su consentimiento con tal carácter en un contrato, aun de naturaleza mercantil, debe entenderse que se

obligó a responder del cumplimiento de las obligaciones que contrajo o pudiera contraer por virtud del mismo, pues su finalidad es precisamente garantizar el cumplimiento de una diversa obligación.

Con lo anterior se resuelve en sí, el punto de contradicción de criterios que surge entre los Tribunales Colegiados contendientes.

Con independencia de lo anterior, y tomando en consideración que debiera existir pronunciamiento sobre el punto relativo a qué tipo de responsabilidad asume la persona que aparece con el carácter de "aval", en un contrato mercantil, debe indicarse que, no obstante la figura del "aval", es exclusiva de los títulos de crédito, no se le debe eximir de responsabilidad a quien con ese carácter suscribe un contrato mercantil; máxime que como en el caso, según se advierte de las ejecutorias que dieron motivo a la contradicción, en ambos casos, de las cláusulas de los contratos mercantiles correspondientes, los demandados, respectivamente, otorgaron su consentimiento para que se les considerarán como "avales" y se obligaron a responder preferentemente del cumplimiento de las obligaciones que contrajeron, como consecuencia de la disposición de los créditos otorgados (foja 70 de la ejecutoria dictada en el amparo directo D.C. 9423/2000) y para que se documentara la operación de factoraje (foja 12 y 13 del juicio de amparo directo D.C. 2865/95).

177



En estos casos, el tipo de responsabilidad que deben asumir deberá ser con la figura jurídica más adecuada de acuerdo con la real intención de las partes (obligación solidaria o fianza).

Existen infinidad de hipótesis que pueden surgir.

Evidentemente que, si de las cláusulas correspondientes del contrato mercantil se advierte o desprende que quien firmó como "aval" asumió ser obligado solidario o fiador, no hay duda que con tal carácter, respectivamente, deberá responder.



Si alguna cláusula en los contratos admitiese diversos sentidos, deberá estarse al más adecuado para que produzca sus efectos.

ORTO DE
I NACIÓN
JUEVES DE
24/12

Si algún término tuviere diversas acepciones, será entendido en aquél que sea más conforme con la naturaleza y el objeto del contrato.

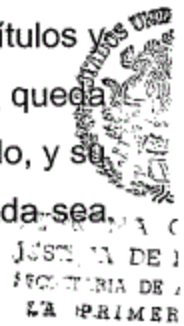
Pero qué sucede como en los casos que se cuestionaron en las ejecutorias origen de la contradicción, en donde de acuerdo con los antecedentes, se pactaron cláusulas, en donde para garantizar la obligación, una persona se obligó a firmar algún tipo de título de crédito y firmó el contrato mercantil con el carácter de "aval".

En mi opinión, cuando una tercera persona, voluntariamente asume una obligación de "aval" con el acreditado, está manifestando su deseo de ser obligado solidario.

Llego a esta conclusión, tomando en consideración que en términos del artículo 1987 del Código Civil Federal, habrá solidaridad pasiva, cuando dos o más deudores reporten la obligación de prestar, cada uno de por sí, en su totalidad, la prestación debida.

El artículo 1988 del propio Código dispone que, la solidaridad no se presume; resulta de la ley o de la voluntad de las partes.

Por otra parte, el artículo 114, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, indica claramente que, el avalista queda obligado solidariamente con aquel cuya firma ha garantizado, y su obligación es válida, aun y cuando la obligación garantizada sea nula por cualquier causa.



Es decir, la persona que firma como aval en un contrato mercantil, en términos de los artículos antes indicados, debe considerarse como obligado solidario, porque precisamente la solidaridad deviene tanto de la ley (artículo 114, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito), e incluso de la voluntad de la persona al suscribir el contrato con ese carácter.

Sin que con esa voluntad de las partes, además, pueda considerarse desnaturalizar el contenido de las instituciones jurídicas, puesto que, no hay que olvidar que en materia mercantil, en términos del artículo 78 del Código de Comercio, cada uno se obliga en la manera y términos que aparezca quiso

178



obligarse, es decir, la intención de quien firmó como aval, fue precisamente garantizar solidariamente, el cumplimiento de la obligación contraída por el deudor principal; máxime si se toma en cuenta que además de firmar como "aval" el contrato mercantil, también existe el compromiso de suscribir un pagaré, como consecuencia de la misma operación.

Además, debe tomarse en cuenta que en los asuntos resueltos por los tribunales que manifestaron criterios contradictorios, la acción se está fundando precisamente en documentos mercantiles que, en términos de los artículos 68 de la Ley de Instituciones de Crédito y 48 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito, respectivamente, constituyen títulos ejecutivos, situación que es acorde con las jurisprudencias 1a./J 23/2000 y 1a./J 24/2000, que estableció esta Primera Sala, en donde se señaló, que de acuerdo con los artículos antes indicados, los contratos o las pólizas en los que, en su caso, se hagan contar los créditos junto con los estados de cuenta certificados por el contador facultado por la institución de crédito acreedora, serán títulos ejecutivos, sin necesidad de reconocimiento de firma ni de otro requisito; señalándose en los textos de las citadas jurisprudencias, que del análisis relacionado de los citados artículos 68, 48 y del artículo 1391, fracción VIII, del Código de Comercio, permite concluir que el juicio ejecutivo mercantil procede, entre otros casos, cuando se funda en un documento que por ley tiene el carácter de ejecutivo, como sin duda lo es el contrato de crédito junto con el estado de cuenta certificado por el contador facultado por la institución de crédito acreedora.



CORTE DE
1.ª SALA
JURISDICCION
DE LA SALA

También así lo reconoció, la otrora Tercera Sala de esta Suprema Corte al sostener la jurisprudencia 3a./J. 15/94, cuyo rubro señala: "ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS. REQUISITOS PARA QUE CONSTITUYAN TÍTULOS EJECUTIVOS" y recientemente también lo hizo esta Primera Sala, en las consideraciones que sirvieron de base para resolver la contradicción de tesis 40/2001-PS, que dio origen a la tesis de jurisprudencia cuyo rubro señala: "VÍA EJECUTIVA MERCANTIL. ES IMPROCEDENTE SU EJERCICIO EN CONTRA DEL GARANTE HIPOTECARIO CUANDO NO TIENE A LA VEZ EL CARÁCTER DE ACREDITADO, MUTUATARIO U OBLIGADO SOLIDARIO (ARTÍCULOS 68 Y 72 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO)".

Lo anterior lo menciono, en virtud de que el simple contrato, junto con el requisito precisado, es suficiente para la procedencia de la vía ejecutiva, lo cual equivale a que se pueda considerar que, a tal contrato le son aplicables, en lo que proceda, las mismas instituciones que se establecen para los títulos de crédito, de otra manera no se explica la procedencia de la vía ejecutiva, es decir, es como consecuencia de la ley, pero incluso, como se precisó con antelación, también cabe que opere la manera y términos en que las partes quisieron obligarse.

De esa manera se tiene que el contrato de crédito, junto con el certificado contable, constituye el título ejecutivo base de la acción, lo que permite el ejercicio de la vía ejecutiva mercantil en contra de los acreditados o de sus obligados solidarios.

179



Por tal motivo, concluyo que sí existe la denuncia de contradicción de tesis, pero no comparto las consideraciones que sustentaron la mayoría de los señores Ministros.

LA MINISTRA:


OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS.

SENTENCIA

SECRET



DUPR
JUSTI
SECRET
LA 1